

*Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

investigue y sancione a los responsables y además informe a los familiares el paradero del desaparecido y los indemnice en su caso” - vid par. 67-.

Hasta aquí la jurisprudencia interamericana cuyos lineamientos constituyen una guía de interpretación de las disposiciones convencionales que deben observarse conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto a los textos legales, existen dos instrumentos de suma trascendencia, a saber: la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (en adelante Declaración contra las desapariciones forzadas) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el año 1994. Esta fue ratificada por el Estado Argentino el 6 de octubre de 1994. Del tenor literal de su artículo II surge con claridad la definición de desaparición forzada como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, *seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.*”

Por su parte, la Declaración contra las desapariciones forzadas, prevé en su artículo primero, segundo párrafo, las consecuencias que produce: “Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley